

Las múltiples formas de la resistencia cotidiana al régimen de Franco en Aragón, 1936-1945

ÁNGELA CENARRO

La Dictadura de Franco tuvo que convivir desde sus orígenes con diversas formas de resistencia protagonizadas por algunos grupos sociales sobre los que pretendía imponerse. La exposición de las diferentes muestras de rechazo al régimen debería ir acompañada de una serie de precisiones en torno al concepto de «resistencia», así como de unas cuantas pinceladas que dibujen el marco histórico en el que este fenómeno tuvo lugar. Sólo así podremos comprender la naturaleza, el alcance y el significado de estas actitudes, extendidas en determinados sectores de la sociedad aragonesa.

El concepto de «resistencia» es de difícil precisión. Cuando los especialistas en la Dictadura nazi se enfrentaron a esta espinosa cuestión, acabaron por poner en entredicho que hubiera existido «un movimiento de resistencia» y optaron por hablar de la «variedad» de las formas de resistencia o de la resistencia como un movimiento «heterogéneo». Es decir, optaron por la percepción de las actitudes de resistencia como un fenómeno variado, complejo, que admitía distintas formas, las cuales tenían que ver con el sector social implicado en ellas y su relación con las dictaduras en cuyo seno se desarrollaban. Ello favorecía la sensibilidad hacia un tipo de resistencia que no tenía como objetivo el derrocamiento del régimen y que por lo tanto no estaba teñida de la visión heroica de aquella que estuvo destinada a tal fin. Algunos autores han señalado la existencia de toda una gama de actitudes que podrían calificarse globalmente como de «disidentes» y que irían desde el comportamiento «no conformista» hasta la «resistencia» propiamente dicha, pasando por el «rechazo» y la «protesta». Cada una de ellas supondría, con respecto a la anterior, un paso adelante en cuanto al alcance de la crítica y al carácter público del ámbito en el que tienen lugar. En definitiva, las actitudes que vamos a analizar pueden entrañar una crítica parcial o total (es decir, estar dirigida contra determinados aspectos del régimen o al régimen en su conjunto), tener un carácter pasivo y a veces activo; y su impacto también puede ser desigual, puesto que en unas ocasiones la acción adquiere una dimensión pública y en otras queda restringida a la esfera privada. En cualquier caso, las formas de resistencia que vamos a explorar tienen como objetivo fundamental la muestra de malestar, rechazo o disidencia con respecto a la Dictadura de Franco.¹

1 Todas estas consideraciones en torno al concepto de «resistencia» han sido expuestas para el caso de la resistencia nazi por D. Clay Large en su «Introduction», M. Broszat en «A Social and Historical Typology of the German

Por otra parte, convendría dibujar el escenario en el que dichas acciones tuvieron lugar. El ejercicio de comparar el franquismo con otras dictaduras coetáneas ha dado lugar a resultados muy diferentes según el marco teórico utilizado como referencia. Si optamos por una perspectiva histórica comparativa y ubicamos a España en el contexto de la crisis europea de entreguerras, podemos afirmar que la Dictadura franquista fue una de las salidas fascistas que pretendían cerrar dicha crisis, agudizada en este caso con la llegada de la II República en abril de 1931. Pero fue el único caso en el que la solución fascista requirió una guerra civil para consolidarse. ¿Qué significa esto? De entrada, hay un fenómeno obvio que convendría resaltar. La guerra civil española, en tanto que fue el producto de un golpe militar fracasado por la enorme resistencia que encontró en la sociedad, resultó ser la expresión más clara y contundente de oposición al fascismo. Ésta adquirió en España unas características únicas, pues fue el único lugar en el que se hizo frente a la llegada del fascismo por medio de las armas. Probablemente, esta decisión fue producto de la circunstancia de que la toma del poder fascista tuviese lugar más tarde que en otros lugares europeos, donde las múltiples derrotas sufridas por la clase obrera en Italia, Alemania y Austria se convirtieron en episodios aleccionadores para el movimiento obrero organizado español. De ahí que, en el contexto de la crisis europea de entreguerras, la guerra civil española se convirtiera en la última gran causa de la izquierda y diese lugar a la llegada de voluntarios de todo el mundo dispuestos a dar su vida por la República.

Que la Dictadura de Franco tuviera su origen en una cruenta guerra civil significaba algo más también. La intensa oleada de violencia que tuvo lugar inmediatamente después del golpe militar es algo que no tuvo que vivir la izquierda alemana y mucho menos la italiana. Tampoco se encontraba en su bagaje de experiencias el combate diario durante tres años contra las grandes potencias fascistas (que prestaron apoyo militar a los insurgentes), sin poder contar con el respaldo de las democracias occidentales. En definitiva, a la altura de abril de 1939, republicanos e izquierdistas españoles habían experimentado ya la represión en masa, el abandono de las potencias democráticas, el agotamiento después de tres años de guerra y, finalmente, una derrota militar. No es descabellado pensar que los supervivientes del conflicto tenían acumuladas unas experiencias mucho más traumáticas que aquellos que vivían bajo otras dictaduras fascistas en su fase inicial. Esto es algo que debemos tener especialmente en cuenta para poder comprender la «resistencia» que tuvo lugar en los años cuarenta. Pues quienes resistían eran, ante todo, los «vencidos» en una guerra, que se enfrentaban a la reconstrucción de posguerra en una situación de sumisión e indefensión con respecto a los «vencedores». El miedo que éstos impusieron a base de venganzas y denuncias, el cansancio, la división de comunidades y familias como producto de la violencia, la destrucción de las tradicionales redes de asociación y el consiguiente aislamiento social son,

por lo tanto, elementos que deben tenerse especialmente en cuenta para comprender la naturaleza de la «resistencia».

No obstante, la sumisión a la Dictadura por parte de los «vencidos» no fue total. A pesar de las difíciles condiciones para la puesta en marcha de cualquier tipo de resistencia al régimen, ésta existió desde fechas muy tempranas. Según se desprende de los informes emitidos por las delegaciones provinciales de Falange, las autoridades franquistas no sólo estaban lejos de conseguir el deseado consenso sino que desde el final de la guerra detectaban actitudes que no se correspondían con su voluntad de imponer el silencio y la sumisión total a los derrotados. El jefe provincial de FET-JONS de Teruel llegaba a afirmar en agosto de 1941 que «la actuación de la justicia militar, poniendo en libertad a elementos de un matiz rojo subido crea en los pueblos un estado de ánimo alarmante». A mediados del año 1943, el jefe provincial de Zaragoza detectaba la presencia de «elementos de izquierdas que despertaban de su letargo de miedo», cuyas actividades podían ir desde el reparto de pasquines clandestinos hasta los intentos de rehacer las organizaciones obreras, desmanteladas por la ley y por las armas desde hacía años.² Este tipo de resistencia estuvo impulsado fundamentalmente por antiguos militantes izquierdistas y fue contestado por las autoridades del Nuevo Estado mediante acciones violentas dirigidas por el Ejército y las fuerzas de seguridad (Guardia Civil fundamentalmente, pero también Policía y Falange). A partir de 1944, tras la fracasada invasión del valle de Arán, emergieron núcleos de guerrilleros comprometidos de manera decidida con la lucha armada contra la Dictadura. Su organización y actividades estaban controladas por el Partido Comunista, pero no actuaron en solitario sino que contaron con el apoyo de un sector minoritario de la sociedad campesina, que contribuyó de diversas formas al mantenimiento y la protección de los guerrilleros. En torno a éstos se crearon redes de apoyo surgidas a partir de las relaciones de parentesco y vecindad en la sociedad rural, que sirvieron para canalizar la conflictividad campesina que el régimen intentaba neutralizar por medio de la fuerza.³

El contexto de la posguerra propició otro tipo de resistencia inarticulada, que no estaba dirigida a rehacer las organizaciones izquierdistas de manera clandestina. Constituye lo que podemos calificar de variadas formas de resistencia cotidiana, cuyo objetivo no era otro que la muestra de malestar, rechazo o disidencia con respecto al Nuevo Estado pero que en ningún momento estuvo dirigida a poner en marcha una acción contundente contra él o a derrocarlo. Las actividades más frecuentes incluidas en este tipo de resistencia fueron los insultos contra el régimen en su conjunto o contra algunos de sus representantes, como el propio jefe del Estado, Francisco Franco, o diversos cargos

2 Este tipo de indicaciones, de carácter impreciso, serán constantes por parte de la Jefatura Provincial del Movimiento de Zaragoza a la Delegación Nacional de Provincias en sus informes mensuales a partir de julio de 1943. La expresión entrecomillada corresponde al de julio de este mismo año. AGA, DNP-SGM, caja 130; la de Teruel, agosto de 1941, caja 79.

3 Así lo ha demostrado M. Yusta en *La guerra de los vencidos. El maquis en el Maestrazgo turolense, 1940-1950*, Zaragoza, IFC, 1999.

falangistas; la propaganda contra el régimen o contra la entrada en alguna de sus organizaciones; la crítica o protesta por determinadas decisiones de la clase política que iban en detrimento de los intereses de ciertos colectivos, y la negativa a cumplir las órdenes o preceptos impuestos por el dictador. Más escasas fueron las agresiones a locales que constituían la sede de algún centro oficial.

Los sectores sociales involucrados en las mencionadas actividades fueron variados. Como ya hemos mencionado, las acciones desarrolladas eran aisladas y no formaban parte de una trama dispuesta a poner en marcha una determinada estrategia contra el régimen. Ello no impidió que las personas que contaban con un pasado izquierdista o «malos antecedentes» fueran los elementos más proclives a desarrollarlas. Por ejemplo, la rivalidad o animadversión entre dos hermanas políticas en la localidad de Tauste pone de manifiesto los estrechos límites del consenso en torno al dictador. Al parecer, sus respectivos maridos habían ofrecido respuestas diferentes al golpe militar de julio de 1936 y el de María Clemente, favorable a los insurgentes, había ido a detener al de Pilar Naval Cruz inmediatamente después de la sublevación sin conseguirlo. Pasados dos años, en el curso de una conversación cotidiana Pilar Naval reprochó a la primera el carácter «criminal» de su marido, palabras que, según expresa el informe, se entremezclaron con otras «contra el Glorioso Movimiento Nacional y las personas de orden que voluntariamente salieron con las autoridades a detener a los enemigos de España». No podemos comprobar la veracidad de las acusaciones vertidas por María Clemente y ni siquiera tenemos certeza de que los insultos de Pilar Naval contra su marido fueran acompañados de frases despectivas contra el régimen. Ésta era, no obstante, la percepción del comandante del puesto de la Guardia Civil, para quien, como para otras autoridades franquistas, cualquier síntoma de malestar o crítica emitido por los que pertenecían al grupo de los «rojos» adquiría una relevancia especial. Lo que sí sabemos es que la mujer denunciada, esposa de un huído a la zona republicana, fue detenida y puesta a disposición del delegado de Orden Público de Zaragoza.⁴

También hubo otras muestras de rebeldía por parte de los «vencidos» en la guerra. Es el caso de Mariano Calomarde, alguacil en Villaspesa, que fue detenido por «izquierdista» cuando este barrio turolense fue recuperado por el Ejército rebelde tras la breve ocupación republicana del invierno de 1937-1938. Los vecinos de la localidad solicitaron su puesta en libertad mediante un pliego de firmas y, a raíz de esta acción colectiva por parte de la comunidad, fue repuesto en su cargo. Finalizada la guerra, su actitud era calificada de «pasiva» y de «rebeldía manifiesta», porque se dedicaba a encubrir a otros vecinos que se negaban a realizar los trabajos ordenados por la autoridad. Otro vecino de la misma localidad, Enrique Ligros Blasco, de «extrema izquierda» y «con un hijo carabenero rojo, pasado desde zona nacional», manifestaba su disconformidad con el Nuevo

4 Archivo del Gobierno Civil de Zaragoza (AGCZ), 23 de noviembre de 1938 (sin clasificar).

5 AHPT, Fondo Gobierno Civil, Sección Orden Público, caja 1101, leg. 72 y 77, sin fecha. Según la autoridad que emite el informe, el pliego de firmas pidiendo su libertad fue una decisión tomada por el vecindario como consecuencia del temor a las represalias por parte de otros elementos «rojos» de la localidad.

Estado de la misma forma.⁵ En Sofuentes (Zaragoza), siete mujeres decidieron celebrar las fiestas de Carnaval en 1940, contraviniendo así una de las órdenes del régimen. Acudieron a un baile disfrazadas con mantones con la intención de burlarse del bando que había emitido el Ayuntamiento unos días antes, en el que prohibía la realización de cualquier actividad que recordase dichas fiestas. Según se desprende del informe de la Guardia Civil, todas ellas (menos dos) eran hijas de antiguos ugetistas y por lo tanto, aunque nunca antes habían dado muestras de rebeldía, eran consideradas «desafectas» al Movimiento. Fueron sancionadas por la Alcaldía con una multa de 25 pesetas cada una.⁶

Estos tres casos ponen de manifiesto que en ocasiones la resistencia no se realizó de manera completamente aislada, sino que contó con cierto grado de aquiescencia o colaboración por parte de quienes rodeaban a los protagonistas de la acción. Ello apunta a la existencia de unas rudimentarias redes sociales, fueran de amistad (como en el caso de las mujeres de Sofuentes) o vecindad (en Villaspesa), que sustentaban dichas acciones. Ahí encuentran su lógica sucesos como el que sigue. En Uncastillo «todos los elementos indeseables de la localidad por sus ideas contrarias al Glorioso Movimiento Nacional» se reunían periódicamente en un local. Después de varias amonestaciones y sanciones a su propietario, el establecimiento fue cerrado finalmente por orden del gobernador civil, lo que pone de manifiesto la voluntad de cercenar cualquier atisbo de reconstrucción de los viejos lazos que vertebraban la comunidad a través de los tradicionales espacios de socialización.⁷

Si bien la mayor parte de aquellos que emitían cualquier síntoma de disconformidad con el régimen eran de antecedentes izquierdistas, ésta es una cualidad que no encontramos en todos los autores, bien porque no consta en el informe, de lo que puede deducirse que no habían estado firmemente comprometidos con las opciones izquierdistas con anterioridad a julio de 1936 o durante la guerra, bien porque eran personas que pertenecían, al menos en potencia, al sector de los «vencedores». En el primer caso, todos los implicados en una u otra forma de resistencia tenían en común el proceder de sectores sociales desfavorecidos desde el punto de vista económico. Así, en Sierra de Luna, un jornalero insultó al jefe local de Falange y a toda la organización, mientras insinuaba el escaso acierto del partido a la hora de distribuir sus presupuestos. La negativa de la autoridad falangista a dar las pertinentes explicaciones fue acompañada de una denuncia ante el comandante del puesto de la Guardia Civil.⁸ Similar es el caso de un comerciante ambulante procedente de Pontevedra que, estando en una taberna de la localidad de Tauste, emitió lo que la Guardia Civil calificaba como «frases derrotistas en contra del Nuevo Estado»; en definitiva, frases como que «Azaña hacía falta en España» y que «Franco mataba a la gente de hambre». Tales palabras fueron razón suficiente para

6 AGCZ, AG, 6/4, 7 de febrero de 1940.

7 AGCZ, AG, 6/7, 10 de agosto de 1940. Carme Molinero y Pere Ysas han reparado en la importancia de la destrucción de los espacios de sociabilidad popular, en «La historia social de la época franquista. Una aproximación», *Historia Social*, 30 (1998), p. 149.

8 AGCZ, AG, 6/4, 21 de enero de 1940.

ser detenido, llevado a la cárcel municipal y puesto a disposición del delegado de Orden Público.⁹

Más llamativo es el caso de algunos elementos que, de entrada, habrían de incluirse en el grupo de los «vencedores», por pertenecer a las fuerzas de seguridad del Estado o ser representantes del orden social. Es el caso del agente de Policía Manuel Álvarez de Lara, de Zaragoza, quien, al hilo de unos comentarios sobre una ley destinada a la reorganización de dicho cuerpo, insultó al jefe del Estado cuando emitió la siguiente frase: «Cabrón e hijo de puta, tú tienes la culpa de todo lo que nos pasa», mientras se dirigía a un retrato de Franco. Una vez la investigación se puso en marcha, varios compañeros declararon en contra del agente y él mismo confesó ser autor de esas palabras y haberlas pronunciado sin ser consciente de la gravedad que entrañaban. Lo más significativo es que Manuel Álvarez de Lara fue puesto a disposición del auditor de Guerra de la 5ª Región Militar, detenido y trasladado a la cárcel provincial de Zaragoza.¹⁰ Algo parecido sucedió con el guardia municipal jurado de Blancas (Teruel), Pedro Martín Cantín, antiguo afiliado a las JONS, por insultar al jefe local de Falange y concejal Gregorio Royo, cuando éste le visitó en una finca en que estaba trabajando. Según se desprende de los informes, el falangista amenazó con denunciar al guardia por no estar cumpliendo con su deber, a lo cual éste respondió que tenía que trabajar la tierra porque el escaso jornal que recibía del Ayuntamiento no le permitía satisfacer sus necesidades más básicas. Después de esta ácida contestación llegaron los insultos: el guardia dijo a Gregorio Royo que «se cagaba en él y en todos los falangistas» y que «si no lo mataba en ese momento era porque no llevaba carabina». Varios testigos confirmaron la versión del jefe local del Movimiento, lo que le valió al guardia municipal la destitución de su cargo y una multa de 250 pesetas.¹¹

Casos como los expuestos revelan la necesidad de ir más allá de la división que impusieron en la sociedad la victoria de unos y la derrota de otros. Entre los que globalmente se califican de «vencedores», existieron diferencias derivadas de la posición social y económica de que disfrutaba cada uno, así como de las relaciones más o menos favorables creadas con su entorno. Tanto el agente de Policía como el guardia jurado protestaban, mediante el insulto, por una situación económica deteriorada o que amenazaba con empeorar. Pero ninguno de los dos pudieron contar con la protección o el apoyo de quienes les rodeaban: ambos fueron víctimas de las denuncias o los testimonios en contra de sus vecinos o compañeros. Podría apuntarse que existió todo un amplio sector de la población que, sin tener antecedentes izquierdistas ni haber colaborado con las milicias en la retaguardia republicana, se vio desfavorecido por determinadas políticas puestas en marcha por el régimen. Sin duda, el ejemplo más claro de este fenómeno lo constituye el intervencionismo económico, que dio lugar a la aparición de un «mercado negro» y a que amplios sectores de la población, con independencia de sus antecedentes políti-

9 AGCZ. 14 de noviembre de 1940 (sin clasificar).

10 AGCZ. 21 de abril de 1941 (sin clasificar).

11 AHPT. Fondo Gobierno Civil, caja 480. 2 de mayo de 1944.

cos, se dedicasen a la práctica del «estraperlo». Tales actividades, consideradas delictivas por el Nuevo Estado franquista, fueron necesarias para la supervivencia cotidiana y tan sólo la pertenencia a una franja de privilegiados económicamente o la posibilidad de contar con protectores entre las autoridades franquistas ofrecían la garantía de salir impunes.¹²

La gente de orden y las autoridades locales también manifestaron de manera ocasional su rechazo o animadversión contra otros representantes del Nuevo Estado. Casi siempre consistieron en muestras de desprecio o indiferencia a los representantes falangistas, de manera que es necesario plantear la cuestión de si tales actuaciones pueden calificarse como verdaderos síntomas de «resistencia» contra el régimen. Lo significativo en estos casos, como vamos a ver a continuación, es la respuesta obtenida por parte de la principal autoridad franquista a escala provincial, el gobernador civil, que contrasta considerablemente con la que recibieron otros grupos sociales ya analizados. Vayamos por partes. Hay noticia de varios sucesos que no agradaron en absoluto a las jerarquías de FET-JONS de Zaragoza. Las afiliadas a la Sección Femenina no fueron tratadas con mucho aprecio en Gotor, donde varias autoridades y elementos destacados de la localidad rechazaron la Medalla del Alzamiento que les iba a ser entregada. La jefa local de Sección Femenina denunció a estas personas, entre ellas dos concejales, que, por consiguiente, tomaron represalias contra la denunciante. Desconocemos la respuesta del gobernador, si es que la hubo, de lo que podría deducirse la indiferencia o inhibición por parte de la máxima autoridad local.¹³ Por otra parte, la delegada provincial de Sección Femenina de Zaragoza hizo saber a sus superiores que ocurrían algunos «incidentes desagradables» con los dueños de la casa en la que estaban ubicadas las oficinas de la Jefatura. Según ella, cuando se recibía una visita para la Sección Femenina los porteros de la casa le prohibían de manera grosera entrar en el ascensor y los propietarios, pertenecientes a la alta burguesía local, no sólo no lo censuraban sino que lo alentaban con la intención de molestar a las afiliadas falangistas. El gobernador civil no pareció dar demasiada importancia a estos hechos, pero sí llamó al portero a su presencia y le hizo saber que de persistir en su actitud acabaría en la cárcel. Nos encontramos aquí con un fenómeno inverso al que relatábamos con anterioridad: es un ejemplo de solidaridad vertical entre los dueños de la casa y el portero, que probablemente libró a este último de males mayores. Pero sí es significativo que los propietarios del inmueble no recibieran ninguna llamada de atención, mientras el portero se llevaba la peor parte, es decir, la advertencia amenazante del gobernador.¹⁴ No podemos, por consiguiente, considerar

12 Los más desfavorecidos económicamente tuvieron la necesidad de recurrir al estraperlo y por lo tanto fueron el blanco preferente de la persecución de las autoridades franquistas. Esta situación de clara injusticia sirvió de excusa para que ciertos grupos falangistas emitieran fuertes críticas contra los principales beneficiarios del régimen, la elite conservadora tradicional. El significado y el alcance de dichas críticas han sido desarrollados por Á. Cenarro, *Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón. 1936-1945*. Zaragoza, Prensas Universitarias, 1997, pp. 161-198. También en «Falange y discurso populista en el primer franquismo», en *Actas II Encuentro de Investigadores del Franquismo*, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert – FEIS, 1995, pp. 83-87.

13 AGCZ, AG, 36 2, 21 de febrero de 1940.

14 AGCZ, AG, 5 4, 19 de diciembre de 1938.

estos actos como de verdadero rechazo contra el sistema. Más bien deben situarse en el contexto de la lucha entre las diversas fuerzas que integraron la coalición contrarrevolucionaria franquista por obtener mayores cotas de poder y seguimiento social. La respuesta dada por las autoridades constituye, por lo tanto, un criterio que ayuda a definir los imprecisos límites de aquello que entendemos por «resistencia».

Esta misma conclusión es la que se obtiene de los casos que se exponen a continuación. No es necesario insistir en el escaso éxito que tuvieron las diversas organizaciones adscritas al partido unido, FET-JONS, a la hora de captar voluntades. A pesar de ello, las actitudes de resistencia con respecto al Frente de Juventudes también podían ser objeto de percepciones diferentes. El concejal y tesorero de Falange de Uncastillo, Raimundo Rived, se presentó en los comedores de Auxilio Social para sondear la voluntad de los niños con respecto a su ingreso en la Organización Juvenil. Entonces pudo comprobar que los hermanos Celso y Constancio Combalia hacían propaganda entre sus compañeros para que no se afiliaran. Cuando intentaba averiguar cuáles eran las razones de este comportamiento se presentó el tío de los niños, Víctor Pérez Idoype, que atribuyó al falangista malos tratos a sus sobrinos. Este hombre fue detenido, acusado de hacer propaganda contra el régimen y de amenazar a un miembro de Falange, pasó a disposición del auditor de guerra y fue hecho prisionero en la cárcel provincial de Zaragoza. No casualmente el citado Víctor Pérez había huido en los primeros días inmediatamente posteriores a la sublevación y, una vez desmantelado el Ejército republicano, había pasado por un campo de concentración.¹⁵ Muy distintas fueron las vivencias de otras personas que se negaban a encuadrar a sus hijos en el Frente de Juventudes. En Singra (Teruel) tres concejales persistieron en su negativa, lo cual motivó su expulsión del partido, pero en ningún momento fueron objeto de otro tipo de sanción, ya que pudieron mantener sus cargos en el Ayuntamiento.¹⁶ En definitiva, los diferentes antecedentes políticos y sociales, así como la pertenencia al sector de los «vencedores» o de los «vencidos», podían ser definitivos a la hora de percibir una misma actuación como un «acto de propaganda contra el régimen» o como una decisión digna de ser respetada.

Lo más frecuente es que, ante síntomas de frialdad con respecto al «Glorioso Movimiento Nacional» por parte de autoridades y personas destacadas, el gobernador civil se inhibiese o no diese credibilidad a la información recibida, que generalmente había sido enviada por los jefes locales de Falange. Existió, por consiguiente, un doble rasero para evaluar los actos de resistencia o indiferencia al régimen. Así, llegaron noticias de que en el casino de Rueda de Jalón, durante la emisión en la radio del himno nacional, algunos socios no querían descubrirse y otros salían del casino. Al informe emitido por el jefe local siguió otro de la Guardia Civil con tono exculpatorio, en el que justificaba tales actitudes, «unos por no haberlo oído y otros por estar distraídos en sus tertulias, ya que la mayoría de los que asisten al Casino son de buenos antecedentes sociales y de

15 AGCZ. AG 6/6, 23 de septiembre de 1940 y 25 de septiembre de 1940 (sin clasificar).

16 Así se indica en el informe mensual del jefe provincial de FET-JONS, de enero de 1942. AGA-SGM-DNP, caja 102.

indudable adhesión a la causa nacional». ¹⁷ Algo similar sucedió en Malón, durante la inauguración de la lápida conmemorativa de los caídos en la guerra civil, a la cual no asistió la mayoría de los miembros del Ayuntamiento y buena parte del vecindario. Si para el jefe local de Falange eran unos hechos de «gravedad», para el gobernador civil constituían tan sólo el resultado de la percepción distorsionada de dicha autoridad. De hecho, encargó a la Guardia Civil la elaboración de un informe, que dio resultados bien distintos. Como consecuencia, el gobernador decidió advertir a la Jefatura provincial de FET-JONS de que «cuando los jefes locales formulen una denuncia comprueben antes los hechos». ¹⁸

Los casos analizados hasta aquí constituyen ejemplos aislados de unas actitudes más extendidas contra la Dictadura franquista, lo que pone de manifiesto que el Nuevo Estado estuvo lejos de conseguir un consenso por parte de amplios sectores sociales. Las consecuencias derivadas de la imposición de un sistema dictatorial por la fuerza fueron diversas. Si unos encontraron la muerte, la cárcel y el exilio, para los que siguieron viviendo bajo la condición de derrotados no se abrieron demasiadas posibilidades. Algunos decidieron sumarse a la estrategia de la lucha armada que los maquis importaron desde Francia; pero la mayoría optó por el silencio y una vida discreta que no llamase la atención. Hubo también quienes mostraron su disconformidad con el régimen de manera puntual, aislada, negándose a obedecer o a secundar sus llamamientos. Era una forma de resistencia individual y desorganizada, aunque ocasionalmente pudiera contar con algunas formas de apoyo rudimentario en el entorno inmediato de los actores. Ello era producto de la destrucción de las redes sociales impuesta por la guerra y la derrota, así como por la creación de un estado de terror permanente que favoreció un tipo de resistencia individual y desprotegida. También entre el sector de los «vencedores» hubo quienes se vieron desfavorecidos por determinadas disposiciones del dictador. A ese eje que dividió la sociedad entre «vencedores» y «vencidos» hay que añadir otro que establece una distinción entre aquellos que, a pesar de pertenecer al primer grupo, no vieron defendidos sus intereses por el régimen que habían respaldado. Como ha podido comprobarse, pertenecían generalmente a grupos no destacados económica y socialmente o incluso desfavorecidos. El resultado acabó siendo una atomización o fragmentación múltiple de la sociedad. ¹⁹

Hemos hecho, además, una incursión en el pantanoso terreno de las percepciones. Resulta difícil establecer con precisión qué puede considerarse o no una muestra de «re-

17 AGCZ, AG, 6/3, 10 de septiembre de 1940.

18 AGCZ, AG, 7/6, 28 de julio de 1941.

19 La necesidad de ir más allá de las divisiones rígidas y captar los «tonos grises» entre las víctimas y los culpables ha sido señalada por A. Ludtke en «De los héroes de la resistencia a los cómplices. "Altageeshiste" en Alemania», en L. Castells (ed.), *La historia de la vida cotidiana*, monográfico de *Ayer*, 19 (1995), pp. 49-69. Una propuesta similar es la de E. Nicolás, para quien es necesario un estudio de las distintas, complejas y contradictorias situaciones que generó la Dictadura, ya que «todos, resistentes, colaboradores, o indiferentes querían sobrevivir al franquismo», en «Los poderes locales y la consolidación de la dictadura franquista», en G. Sánchez Recio (ed.), *El primer franquismo*, monográfico de *Ayer*, 33 (1999), pp. 65-85 (p. 75).

sistencia». Los emisores de los informes consultados, es decir, autoridades del Nuevo Estado como gobernadores civiles y Guardia Civil, aportan pistas sugerentes al investigador, porque en ellos se detecta la existencia de respuestas muy diferentes ante infracciones similares. Tales respuestas pueden calificarse de benévolas y condescendientes unas, de indiferentes otras y de represivas la mayor parte de ellas. De manera que los actos de «resistencia» no sólo quedan definidos por la intención del autor sino también por la percepción que de él tenían las autoridades. Como hemos podido apreciar, los efectuados por autoridades, gentes de orden y personas pertenecientes a los sectores más pudientes de la sociedad tenían todas las bazas a su favor para salir airosos en determinadas situaciones. Justo lo contrario les sucedió a aquellos que contaban en su haber con antecedentes izquierdistas, eran menesterosos o no podían disfrutar de una mínima protección y apoyo por parte de quienes les rodeaban. De manera que para comprender un tipo de conflictividad como el que hemos descrito en los primeros años de la posguerra es necesario efectuar un análisis de doble dirección: una, de abajo arriba, que indague en las intenciones y los objetivos, y otra, de arriba abajo, que profundice en las distintas respuestas ofrecidas y en la razón de estas diferencias. Éste es, quizá, un camino que nos lleve a obtener algunos resultados fructíferos a la hora de comprender la reestructuración social que efectuó el régimen salido de la cruenta guerra civil.